

Centroamérica: Nuevas prácticas y nuevos contenidos del proceso de cambio¹

Irene Sánchez Ramos

Los acontecimientos de la década de los ochenta transformaron de manera radical a la región centroamericana: la profundidad y alcances de la crisis han creado una región que, al despuntar la actual década, se debate aún entre la preservación de lo viejo y la construcción de lo nuevo.

Del cúmulo de transformaciones que tuvieron lugar en la región durante la década pasada, una de las más significativas tiene que ver con las prácticas y concepciones revolucionarias que, en un proceso acumulativo de por lo menos diez años, tuvieron su expresión más acabada durante los ochenta. El despliegue del proyecto revolucionario ciertamente produjo modificaciones importantes en las tradicionales dinámicas socio-políticas en sus países, pero al mismo tiempo produjo importantes cambios internos. El protagonismo del movimiento revolucionario le llevó a un doble resultado: afectar y ser afectado por el desarrollo del conflicto.

La complejidad de los nuevos escenarios mundiales dio a este proceso dual un significado mayor en tanto el movimiento revolucionario debió adaptarse no sólo a las transformaciones que su propia acción provocaba, sino además a las que el contexto mundial le exigía. La distensión a nivel de las grandes potencias, el derrumbe del llamado socialismo real, la preeminencia de la negociación como posibilidad de resolver los conflictos, etcétera, son parte de los factores internacionales que llevan a readequaciones que paulatinamente van adquiriendo carácter estratégico para los movimientos revolucionarios.

Buena parte de los análisis que intentan hacer el inventario de los años ochenta —bajo diferentes lenguajes y perspectivas incluso disímiles— tienen un denominador común: fue una “década perdida”. Ciertamente, si los últimos diez años se revisan a la luz de los efectos negativos que la crisis produjo sobre los índices de la calidad de vida y sobre las cifras de producción, Centroamérica, habría no sólo perdido diez años, sino regresado dos décadas atrás.

Siendo esto una realidad incuestionable es, sin embargo, sólo una cara de la moneda. El proceso de destrucción incluye también un proceso paralelo de construcción de nuevos elementos y factores que hoy interactúan con los resabios de lo destruido. La “década perdida” debe ser analizada también desde la perspectiva de aquello que ha tomado —o tiende a tomar— el lugar de lo que ha sido derrumbado. Sin duda, este proceso no ha terminado y aún es difícil aventurar el camino concreto que habrá de seguir, pero lo cierto es que precisamente por su transitoriedad, este periodo contiene una gran riqueza de elementos que es urgente retomar, pues en él, está presente el germen de lo que será la Centroamérica del fin de siglo.

1. La vigencia del cambio.

Si se revisa la situación centroamericana al despuntar la década pasada y se le compara con la que vive al inicio de la actual, las diferencias saltan a la vista. Los signos de los primeros años de los ochenta apuntaban hacia un evidente auge del movimiento revolucionario después de que en Nicaragua el triunfo sandinista habían puesto a la orden del día la posibilidad de la toma del poder.



¹ Ponencia presentada en el Encuentro Internacional de Latinoamericanistas, XXX Aniversario del CELA, ciudad de México, 5-7 septiembre 1990.

Mientras tanto, la insurgencia guatemalteca y salvadoreña incrementaban paulatina y sostenidamente su acción y presencia, poniendo en grave riesgo la seguridad del modelo político dominante. En Guatemala, la guerrilla renovaba su presencia y mostraba que era posible acceder a un nuevo ciclo; en El Salvador las organizaciones revolucionarias desplegaron el potencial político y militar acumulado en casi diez años de existencia. Todo ello acompañado de un auge de masas cuyo nivel de radicalidad parecía acrecentarse mientras más agudo fuera el clima de represión.

Diez años después, los hechos parecen mostrar otro panorama. En Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, pierde las elecciones y pasa a la oposición; por su parte, los movimientos revolucionarios en Guatemala y El Salvador participan en procesos de búsqueda de una solución negociada respaldados en su poderío militar. A un nivel más general, es innegable que el espectro de los golpes militares parece no ser ya una amenaza inminente en países donde tradicionalmente ésa fue la salida cotidiana para resolver situaciones políticas difíciles. Las elecciones parecen haber obtenido carta permanente y hoy los gobiernos se construyen —o caen— por los votos.

Desde este punto de vista, y a pesar de permanecer actuantes los movimientos revolucionarios alzados en armas, pareciera que la región ha entrado a un clima tendiente a la pacificación. Los procesos de diálogo en marcha hacen prever que los resabios de la guerra imperante en la década de los ochenta pudieran desaparecer ante una eventual solución negociada.

El problema, sin embargo, no es tan sencillo como parece. La situación se complica cuando a esta visión de un conflicto prácticamente resuelto se le añaden algunos cuestionamientos. Más allá de una revisión superficial, ¿los problemas que generaron el conflicto han sido resueltos? Más aún, ¿es posible resolverlos mediante los mecanismos actuales?, ¿cómo reenfrantarán los regímenes centroamericanos la contradicción entre la obligada apertura de espacios políticos para profundizar en el nuevo escenario y al mismo tiempo implantar el proceso de ajuste económico que, en sí mismo, tiene un alto contenido de efectos sociales contraproducentes?

Muchos de los análisis actuales tienden a analizar a la región centroamericana bajo la óptica formal de la disminución de los niveles de violencia, de los procesos de negociación en desarrollo y de la continuidad de los eventos electorales como si todo esto en su conjunto significara necesariamente el fin del conflicto. La rearticulación de la vida política de la región alrededor del eje de la democracia formal y de las eventuales soluciones negociadas a la guerra no es tanto el resultado de una solución a fondo de la crisis, sino es producto de la forma específica en que se desarrolló el conflicto y, sobre todo, de la

modalidad con que la política norteamericana actuó en la región durante la década.

En efecto, hacia la segunda mitad de la década pasada la estrategia aplicada por el gobierno norteamericano para derrotar a las insurgencias y derrocar al régimen sandinista, había llegado al punto de una inminente regionalización de la guerra, involucrando incluso a países —Honduras y Costa Rica— que previo al estallido de la crisis carecían de problemas internos graves. La firma de los Acuerdos de Esquipulas en agosto de 1987 introdujo una variante en la situación al ubicar el conflicto en el terreno político y bajar el perfil —que no desaparecer— de la confrontación militar que había llegado a altos niveles de peligro para toda la región.

Con su desarrollo y aplicación —fundamentalmente en los aspectos dirigidos contra el régimen sandinista— el contexto regional se modificó sustancialmente incidiendo de manera importante en el desarrollo posterior de los acontecimientos. La relegitimación de los mecanismos políticos institucionales, avalados internacionalmente en la medida que fueron resultado de la concertación de los gobiernos centroamericanos, fincaron las bases para cambiar las reglas del juego en el conflicto. No obstante haber sido firmados por los gobiernos, sus consecuencias tuvieron efectos sobre el conjunto de las fuerzas políticas (desde gobiernos hasta partidos políticos) a los cuales no escaparon, por supuesto, los movimientos insurgentes. Frente al nuevo marco, éstos no podían seguir contemplando a la negociación sólo como un elemento táctico dentro de su estrategia global.

Si bien los movimientos insurgentes planteaban desde el inicio de la década la posibilidad de diálogo con sus respectivos gobiernos (el FMLN, por ejemplo, lo hace desde 1980), lo cierto es que la coyuntura construida por los Acuerdos de Esquipulas va haciendo de la lucha institucional un aspecto estratégico, es decir, el eje alrededor del cual eventualmente se potenciarían el resto de los elementos de la estrategia revolucionaria.

También para el régimen sandinista el cambio consistió en entrar a un escenario donde, no obstante la derrota militar de la contrarrevolución, cada vez quedaba más claro que la posibilidad de dar fin a la guerra pasada por la batalla en el campo político.

Muchos cuestionamientos podrían hacerse respecto de los beneficios de haber aceptado el reto de la lucha institucional; sin embargo, la situación hacia mediados de la década había dado un viraje de tal magnitud que el rechazo tajante de las nuevas reglas del juego por parte de los movimientos insurgentes o el régimen sandinista hubiera significado el aislamiento internacional que, en el mediano plazo, podría haber afectado el proyecto en su conjunto. Muchos errores se han cometido en este terreno novedoso

para los movimientos revolucionarios y la pregunta siempre es pertinente: ¿habría existido otra opción?

La "fórmula" mediante la cual los regímenes centroamericanos lograron superar la fase más crítica del conflicto regional y, en particular, los conflictos nacionales no fue, sin embargo, suficiente para dar respuesta a las exigencias que el movimiento popular levantó al inicio de la década. En todo caso, los mecanismos fueron suficientes frente al conflicto regional, pero no para la solución real del conflicto interno. Aún queda por resolver el problema de la concentración de la riqueza y sus repercusiones sociales inherentes; la falta de oportunidades políticas y económicas para una parte importante de la población; los graves desniveles de vida que se han profundizado por efecto del conflicto; la pérdida de soberanía como consecuencia de haber involucrado la política interna en el marco de la estrategia norteamericana.

El desarrollo de los mecanismos formales de democracia, no obstante su importancia—sobre todo en una región donde para la generalidad de los países eran hasta hace poco desconocidos—, no bastan o son insuficientes tal y como hasta ahora se encuentran. Son la base a partir de la cual podrían implantarse mecanismos iniciales de participación de todas las fuerzas sociales, pero no son aún la solución de los problemas apuntados arriba.

El cambio revolucionario en Centroamérica sigue siendo una necesidad, pero hoy los mecanismos para lograrlo han variado. El reto actual de las organizaciones revolucionarias pasa por una reformulación de su estrategia que, al parecer, tiende a rearticularse alrededor de la lucha político-institucional.

2. Los cambios en el contenido

Uno de los cambios fundamentales en este aspecto es el que se ha operado en torno al lugar que ocupa el concepto de democracia en la estrategia de los movimientos revolucionarios. Hasta hace poco considerada sólo por sus aspectos formales o por su contenido "burgués", la democracia fue desdeñada como parte sustancial de la estrategia para el cambio. La verdadera transformación revolucionaria pasaba, en primera instancia, por la desaparición de todo resabio del pasado incluyendo formas tradicionales de democracia como las elecciones. La revolución sandinista, en este contexto, apareció con una actuación novedosa al abrir espacios de democráticos aun en un contexto de guerra.

La democracia, incluso en sus aspectos formales, hoy ha sido recuperada como eje estratégico—tanto programático como organizativo— de la revolución. Es reivindicada desde varias perspectivas: como una demanda central ante el Estado; como una democracia integral (en lo político, pero también en

lo social y lo económico) frente a una democracia limitada; es, finalmente, reivindicada como una democracia no sólo representativa, sino principalmente directa que abarca los distintos campos de la vida nacional.

La demanda de democratizar a la sociedad tiene también su referente al interior de las organizaciones revolucionarias. La democracia es vista cada vez más por sus miembros como una exigencia para el "saneamiento" interno y como el camino que permitirá enfrentar los nuevos retos. Si bien en este aspecto no es posible generalizar ni asumir que la conciencia de esta necesidad ha operado de manera inmediata a nivel de la práctica interna de las organizaciones, en todo caso es un proceso que tiende a ponerse a la orden del día y del cual depende en buena parte la posibilidad de desarrollo de la organización revolucionaria.

Como parte de estas transformaciones, la concepción clásica de partido tiende a ser reformulada, principalmente en lo que atañe a sus versiones o componentes autoritarios y excluyentes. En su objetivo "hacia afuera"—el que hace directamente el ejercicio del poder o, en su caso, a la perspectiva del poder— las organizaciones revolucionarias se ven enfrentadas al reto de la posible y necesaria alternancia en el poder y a la conciencia de que, más allá de la fuerza político-militar, un *proyecto nacional* se construye con la participación de otras fuerzas políticas. Una situación de "partido único" tiene hoy escasas perspectivas para los movimientos revolucionarios.

Conceptos como paz, pluralismo, patria, nación, identidad histórico-cultural, ocupan hoy—explícita o implícitamente— lugares relevantes en los programas de los movimientos revolucionarios. Pero más allá de un sitio en los programas, han adquirido—al igual que la democracia— un papel estratégico en tanto se han convertido en conceptos que llevan tras de sí un importante potencial organizativo.

3. Los cambios en la forma

Desde nuestro punto de vista, las condiciones que generaron el estallido revolucionario de principios de la década de los ochenta se mantienen en su sentido básico. La revolución sigue siendo necesaria, pero del mismo modo en que hoy se rearticula alrededor de nuevos contenidos, requiere de nuevas formas para ser posible. Es innegable que la lucha político-institucional—aquella que se da dentro de los marcos de la legalidad oficial y en las instituciones del Estado tales como las elecciones o la negociación— se ha convertido en un campo al cual es necesario dar respuesta.

La participación en este campo de lucha fue una práctica sistemáticamente negada por los movimientos revolucionarios. Las organizaciones político-

militares que surgen a inicios de los años setenta son en gran medida, producto de la superación de la concepción revolucionaria vigente en los años sesenta, y ésta a su vez surge de la crítica a la idea de que el proceso de acumulación de fuerzas pasaba fundamentalmente por la ocupación de espacios políticos. Con las evidentes y profundas diferencias en cuanto a estrategia y táctica revolucionarias, las organizaciones en los sesenta y en los setenta tuvieron como denominador común el rechazo a la participación en la lucha político-institucional.

Lo que hoy se presenta como la tendencia a participar en ese espacio de lucha es algo más que un simple "regreso al pasado" o un mero acomodo a los tiempos actuales. La posibilidad real de acceso al campo político institucional es posible porque la estrategia impulsada en los setenta —que evitó el estancamiento de la revolución y aceleró los cambios en los respectivos sistemas políticos— fue el factor de acumulación de fuerza necesaria y suficiente para participar en los procesos de negociación y, eventualmente, en los procesos electorales.

La lucha político-institucional hoy se ha convertido en un componente esencial de la estrategia revolucionaria y, por lo demás, tiende a convertirse en el eje que potencialmente articulará dicha estrategia. De esta potencialidad hablan los procesos de diálogo-negociación. El reto que actualmente plantea la práctica en un terreno poco transitado por los movimientos revolucionarios es la capacidad para responder en una forma tal que, incluyendo las nuevas prácticas políticas, pueda ser potenciado el proyecto de transformación social.

Lucha por la democracia y lucha político-institucional son las dos caras de la moneda en este periodo. Para los movimientos insurgentes esto significa, entre otras consecuencias: aceptar a las elecciones como un posible mecanismo para la disputa del poder; aceptar que la disputa del poder será periódica y, por tanto, que el relevo en el control del aparato estatal es una regla del juego; en consecuencia, que el poder deberá ser compartido con otras fuerzas.

Ahora bien, si la forma de "hacer la revolución" involucra estos aspectos, ¿significa que la vía armada ha perdido vigencia? Incluso desde algunas perspectivas de izquierda pareciera aceptarse que las armas no son ya el camino para provocar el cambio. El debate, en primer término, debiera contemplar que el protagonismo del movimiento revolucionario durante la década pasada y su probable participación, actualmente en espacios político-institucionales ha sido posible en función de la fuerza acumulada en el campo político y en el campo militar. En sociedades donde la mínima expresión opositora ha tenido como respuesta la represión, la vía armada fue asumida como el único recurso posible y fue, por sus efectos contundentes, la que en última instancia obligó a la apertura de los mínimos espacios políticos.

En efecto, sin la previa acumulación de fuerza político-militar sería impensable que el movimiento popular fuera parte activa del proceso de construcción de sus naciones. Sin embargo, en el marco de las transformaciones políticas que se han operado en la región y en el mundo, la estrategia apunta a un límite. Cada vez se presenta como más contradictoria la participación en espacios político-institucionales con el mantenimiento de la lucha armada pero, al mismo tiempo, ésta parece ser la única garantía tanto para el arribo a acuerdos sustantivos como para su cumplimiento. Por este camino la contradicción sería insalvable: la fuerza militar sigue siendo la base necesaria para actuar en espacios políticos institucionales, pero éstos obligan a bajar el perfil de aquélla. La posibilidad de evitar la pérdida del poder acumulado radica precisamente en la capacidad de los movimientos revolucionarios de romper este círculo vicioso.

Quizá todavía con mayor énfasis en el contenido que en la forma, las organizaciones revolucionarias caminan hacia este objetivo: el cambio que ya se percibe en cuanto al tratamiento hacia los procesos electorales, la participación en procesos de diálogo, la búsqueda de una diferente relación con el movimiento popular y otras fuerzas políticas, la experiencia en el campo diplomático internacional, en fin, las nuevas prácticas que desarrolla el movimiento revolucionario, tendencialmente estarían apuntando a una rearticulación nueva de su estrategia.

Retomando la pregunta sobre la vigencia o no de la lucha armada, la perspectiva parece más bien encaminarse hacia una disminución paulatina de su papel como *factor articulador de la estrategia en su conjunto* para convertirse, en el actual periodo, en el elemento que acompaña los esfuerzos hacia una solución política. Más allá de las características del nuevo contexto, la necesidad de acumular fuerzas sigue siendo intrínseca al cambio revolucionario y ese proceso de acumulación muy difícilmente podría estar exento de expresiones de violencia fundamentalmente porque el carácter represivo de los regímenes centroamericanos sigue dando signos de permanencia.

En la actualidad, la reacumulación de fuerzas requieren quienes impulsan el cambio revolucionario no necesariamente habrá de provenir de la lucha armada en la forma específica en que se desarrolló en los últimos veinte años, pero sí bajo nuevas modalidades que el movimiento popular asuma directamente como propias y, al mismo tiempo, le permitan sostener y profundizar su papel político protagónico.

4. Los sujetos del cambio

En la concepción clásica, el proletariado (o la clase trabajadora) es el artífice y beneficiario principal de

los cambios económicos, sociales y políticos del proyecto revolucionario. La realidad centroamericana —y de hecho la de América Latina— muestra que ese sujeto ha sufrido una profunda disminución numérica, además de importantes cambios en su inserción en el proceso productivo.

En Centroamérica, la crisis económica y la situación de guerra ha provocado, además, que nuevos actores aparezcan en la escena social, que otros hayan menguado su peso organizativo y que otros asuman un papel de importancia que no tuvieron en otros periodos. Los refugiados, los desplazados, los cooperativistas, los indígenas, los subempleados, los repobladores, los comuneros, los cristianos, las mujeres, los jóvenes, etcétera, son actores que han adquirido un nivel de importancia tal que hoy es imposible el desarrollo de cualquier proyecto político-social sin su activa presencia.

El proceso de "informalización" de la clase trabajadora —que ha dado lugar a una amplia masa

de subocupados urbanos— tiene repercusiones en el plano organizativo. La forma de organización por sindicatos o gremios tiende a reducir su importancia —sin que ello signifique, por supuesto, su desaparición— para dar paso a formas organizativas basadas en los aspectos territoriales, es decir, más por el lugar de residencia que por el sector productivo. Sin que esto todavía tenga una expresión clara, la consecuencia previsible es la aparición de nuevas formas de actuación y participación política.

La revolución no tiene ya un solo sujeto privilegiado. La proliferación y diversificación de sujetos exige hoy a los movimientos revolucionarios la construcción de un proyecto que, para ser viable, requiere la inclusión de demandas tan variadas como variado es el movimiento popular. De ahí que el cambio social se plantea como un problema de *carácter nacional* que, por lo demás, tiene como base la concertación y el pluralismo.